

## La “Ley Televisa”, crónica de una imposición

*Jenaro Villamil*

En vísperas de que la Suprema Corte de Justicia iniciara, a finales de mayo, su análisis definitivo sobre la constitucionalidad de la “Ley Televisa”, el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel, sorprendió a su propio partido y a no pocos operadores de esta legislación afirmando que la aprobación de las reformas a las leyes de radio y televisión y de telecomunicaciones fueron resultado de una “imposición” en el contexto de las negociaciones sobre los convenios publicitarios con las televisoras para la campaña presidencial del 2006.

El ex secretario de Gobernación nada dijo que los opositores a la “Ley Televisa” no hubieran señalado durante los meses aciagos que corrieron de diciembre de 2005 a abril de 2006, cuando prácticamente dos poderes de la Unión —el Legislativo y el Ejecutivo— cayeron postrados a los intereses de los ejecutivos de Televisa y de TV Azteca para sacar adelante reformas que, en esencia, significaban una “captura del Estado” y un secuestro del futuro de la convergencia tecnológica en manos de los monopolios de medios electrónicos y telecomunicaciones.

Lo sorprendente fue que Santiago Creel —él mismo uno de los favorecedores del esquema duopólico de la televisión mexicana—, reconoció que eran “tiempos de rectificación” y que en la actual Legislatura su partido se comprometía a impulsar auténticos cambios para alentar la competencia en esta materia.

Los senadores perredistas, en especial el coordinador Carlos Navarrete, tomó la estafeta y se comprometió a impulsar una reforma a la contrarreforma que significó la “Ley Televisa”. El diputado federal Raymundo Cárdenas, quien fue un activo crítico de la ley durante su paso como senador en la Legislatura pasada, alertó junto con otros legisladores como el priísta Carlos Rojas —también

opositor a la ley en el Senado— que eran no sólo los tiempos de la rectificación sino de la legislación.

A pesar del ambiente de optimismo que dominó después de que los ministros de la Suprema Corte decidieran qué aspectos esenciales de estas reformas eran violatorias a la Constitución, no se puede olvidar ni obviar que las intrincadas redes de intereses que representan las televisoras tienen a sus cabilderos, operadores y a sus congresistas para evitar cualquier intento de democratización de los medios electrónicos.

Por eso es importante revisar y revisitar la historia reciente de la “Ley Televisa”, en especial, lo sucedido en el Senado de la República donde un puñado de valientes y convencidos legisladores, encabezados por Javier Corral, Manuel Bartlett, César Raúl Ojeda, Dulce María Sauri, Felipe Vicencio, Raymundo Cárdenas, dieron una batalla limpia, clara, de cara a la nación que finalmente los ministros de la Suprema Corte reivindicaron a pesar de la imposición.

Junto con ellos, una opinión pública vigorosa, informada, insistente, indignada, nunca bajó la guardia. El menosprecio infinito de los dueños del imperio del *rating* a los puntos de vista críticos recibió un balde de agua fría en junio de 2007. La historia aún no tiene punto final.

### **La noche amarga**

A las 3:15 de la madrugada del viernes 31 de marzo de 2006, culminó la aprobación de la “Ley Televisa” en el Senado de la República. Tras 15 horas de sesión continua, el ambiente en el edificio de Xicoténcatl era desolador. Ningún senador aplaudió, como acostumbran hacer al final de cada jornada legislativa. De los 81 legisladores que aprobaron en lo general la ley y de los 78 que la respaldaron en lo particular, sólo el priísta Emilio Gamboa esbozaba un aire triunfal.

Diego Fernández de Cevallos —él mismo, una especie de espectro radioelétrico— fumaba su puro y lucía el saco roto desde la tarde del inicio de la sesión, cuando una “horda” —según sus términos— le reprochó a la entrada del Senado su apoyo a esta contrarreforma. El presidente del Senado, Enrique Jackson, desapareció en las infinitas puertas de la casona de Xicoténcatl. No dio la cara

para explicar por qué nunca aceptó la moción suspensiva a la discusión de esta minuta impugnada por todos los expertos independientes.

La sensación de los 40 senadores opositores era la de haber sufrido una derrota temporal, “por razones electorales”, frente al máximo poder que impuso sus reglas del juego, sus intereses y hasta su calendario sobre toda la clase política: el poder mediático. Para los promotores, la victoria era pírrica.

La bancada del PAN prácticamente acabó fracturada, tras un agrio debate entre Felipe Vicencio y Diego Fernández de Cevallos, quien no dudó en descalificar desde la tribuna como “albaceas” de Manuel Gómez Morín a senadores opositores como Javier Corral y de acusar de “filibusteros” a los poco más de 30 senadores que dieron la batalla hasta el final para incorporar algún cambio a la minuta.

En el seno de la fracción del PRI los ánimos también se caldearon. Al ex gobernador de Puebla y ex secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, no lo pudieron doblar ni las insinuaciones de Emilio Gamboa Patrón ni los amagos de golpes en su contra. Mucho menos a Dulce María Sauri, quien rompió récord de participaciones en la tribuna sin que la contraparte le diera una sola contraargumentación. El diálogo de sordos de esa noche se transformó, un año después, en el expediente más puntual para que los ministros de la Suprema Corte retomaran las críticas vertidas por quienes votaron en contra de las contrarreformas.

Apasionado, enfático, convencido de que la batalla era frente a los televidentes del Canal del Congreso, el senador Javier Corral acordó con el bloque opositor que lo importante no era el silencio de los otros sino aprovechar el carácter “didáctico” de una sesión amarga para la historia del Congreso mexicano.

Al no incorporar ningún cambio a la minuta, los 80 senadores que votaron a favor —casi todos puntualmente “premiados” con nuevos cargos en su carrera política— cumplieron así con una de las consignas centrales de los operadores de Televisa.

Unos días antes, el lunes 20 de marzo, la coordinadora de campaña del panista Felipe Calderón, Josefina Vázquez Mota, sostuvo una reunión con el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez. Como testigo e intermediario de esa reunión que se transformó en un pacto, estuvo Eduardo Medina Mora, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública y actual procurador General de la República. Medina Mora y Bernardo Gómez comparten no sólo

su amistad sino su sociedad en empresas como CreaTV, intermediaria en la venta de publicidad política, tal como documentó la revista *Proceso*.

La orden de Bernardo Gómez a Josefina Vázquez fue que “ni una coma” se le cambiara a la minuta aprobada el 1 de diciembre de 2005 en la Cámara de Diputados. Cualquier modificación a este paquete de reformas bautizadas como la “Ley Televisa” podría provocar que las iniciativas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión retornaran a San Lázaro. Si esto sucedía el plan de negocios del consorcio mediático podía alterarse. Necesitaban, con urgencia, que estos cambios se aprobaran antes de las elecciones presidenciales del 2 de julio y antes de que culminara el periodo ordinario de sesiones.

Para Televisa se trataba de garantizar transexenalmente el dominio del espectro radioeléctrico, obtener privilegios en el mercado de las telecomunicaciones para potenciar el recién inaugurado negocio de las apuestas electrónicas y para competirle a Teléfonos de México (Telmex) en su propio terreno. La “Ley Televisa” formaba parte de un jugoso plan de negocios monopólico, no de un proyecto de modernización de los medios electrónicos.

A cambio de convencer a los casi 30 senadores panistas reticentes a aprobar la minuta de la “Ley Televisa” sin ninguna modificación, Josefina Vázquez Mota logró pactar un estratégico apoyo mediático para la campaña de Calderón: diferir los pagos de publicidad, presionar al Instituto Federal Electoral (IFE) para que garantizara la existencia de dos debates presidenciales y apoyo en estrategia mercadológica.

Quienes conocieron de esta reunión, le refirieron a este reportero, que Bernardo Gómez tenía también el plan para reunirse con la bancada del PRI, el miércoles 22 de marzo. Sin embargo, lo más importante era lograr que un mayor número de senadores de Acción Nacional decidieran apoyar la “Ley Televisa”.

En el caso del PRI, el presidente del Senado, Enrique Jackson convocó a una reunión de sus legisladores el miércoles 22 de marzo para definir el sentido del voto. La correlación ese día fue la siguiente: 14 senadores, encabezados por Dulce María Sauri, Carlos Rojas y Manuel Bartlett, votaron por cambios en la minuta y 25, comandados por Emilio Gamboa Patrón y Erick Rubio Bartell, votaron para que se aprobara “en sus términos”. Jackson no manifestó el sentido de su voto, pero fue claro que estaba a favor de dictaminarla y aprobarla lo más pronto posible.

Los tres ex presidentes del PRI que tenían una curul en el Senado estuvieron aquella tarde en contra de aprobarla “en sus términos”: Dulce María Sauri, Genaro Borrego y Humberto Roque. Este último finalmente se abstuvo. Su explicación fue la siguiente: él era el representante de Roberto Madrazo ante pláticas en la Secretaría de Gobernación y no quería “contaminar” el debate. Borrego fue uno de los primeros opositores más firmes a la minuta proveniente de la Cámara de Diputados. El 8 de diciembre de 2005, les dijo a sus correligionarios que no aceptaría el *fast track*. Su pasión opositora aminoró en las semanas posteriores. Todos cuidaban su “futuro” político. De los ex presidentes del PRI, Dulce María mantuvo su posición firme y cada vez más documentada en contra de lo que llamó una “aberración jurídica”.

La fracción de los 15 senadores del PRD fue la única que acordó pugnar por cambios en la minuta o, por lo menos, lograr que las reformas aprobadas en la Cámara de Diputados se discutieran después de los comicios del 2 de julio. Los senadores Raymundo Cárdenas y César Raúl Ojeda reconocieron que Televisa trató de fracturar a la fracción. No lo lograron. Lo más que hicieron fue la defección de Demetrio Sodi a quien le dieron todo el apoyo a su campaña como candidato neopanista a la jefatura de Gobierno. Ahora es conductor del “Canal de las Estrellas”.

Antes de la noche amarga del 31 de marzo, hubo una operación consciente para marginar a los legisladores “incómodos” en las comisiones dictaminadoras. En principio, se excluyó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, encabezada por el panista Gildardo Gómez Verónica, quien desde el inicio expresó su oposición a la ley. En esa comisión estaba Manuel Bartlett, crítico insistente de las maniobras de su homólogo Emilio Gamboa Patrón.

Trataron pero no pudieron marginar a Javier Corral, el senador más informado en materia de medios electrónicos y de telecomunicaciones, impulsor un año atrás de una reforma que congelaron los mismos senadores que ahora apoyaban la “ley Televisa”. Javier Corral, junto con Felipe de Jesús Vicencio y otros legisladores participaban en la Comisión de Comunicaciones, presidida por el panista Héctor Osuna, pieza clave en la operación para aprobar “en sus términos” la “Ley Televisa”. Lo que sí lograron fue incorporar a la Comisión de Estudios Legislativos, encabezada por el priista Héctor Michel, como la contraparte de Comunicaciones para dictaminar. Necesitaron para lograr una magra mayoría de tres votos en comisiones, ya que prácticamente todos los senadores integrantes

de la comisión presidida por Osuna y convenientemente cabildeada por Emilio Gamboa Patrón estaban en contra de la contrarreforma.

### **Intento de albazo**

El martes 21 de marzo, día feriado, todo estaba listo para el albazo en las comisiones unidas de Comunicaciones y de Estudios Legislativos, para que se dictaminara la minuta proveniente de la Cámara de Diputados y se lograra que el pleno discutiera el jueves 23 de marzo. Emilio Gamboa Patrón, reconocido por todos sus correligionarios como el principal operador de la ley, se transformó en cabildero hiperactivo.

Seis panistas se opusieron ese día al albazo: Javier Corral, Felipe de Jesús Vicencio, José Alberto Castañeda, Wadi Amar Shabshab, César Jáuregui y Alfredo Martín Reyes Velasco. Fueron los mismos legisladores que protagonizaron la resistencia en su fracción durante dos reuniones previas en Cancún y Cuernavaca. Ante todos los demás integrantes de la bancada, argumentaron en contra de la “Ley Televisa”.

Ese martes 21 de marzo, ante la irrupción de Héctor Larios, coordinador de la bancada del PAN, en la reunión casi secreta de las comisiones, Héctor Osuna y Emilio Gamboa Patrón se vieron obligados a posponer la reunión de comisiones para incorporar a cuatro senadores del PAN que no estaban en ese intento de albazo: Javier Corral, Felipe de Jesús Vicencio, José Castañeda y Alfredo Martín Reyes Velasco.

“No podemos arriesgarnos a que armen un escándalo porque fueron marginados”, argumentó en ese momento Héctor Larios. En realidad, ya se sabía que Larios sostuvo un acuerdo con el dirigente nacional del PAN, Manuel Espino para que la “Ley Televisa” se aprobara la semana siguiente.

Espino conminó a todos los senadores de su partido, el miércoles 22 de marzo, para que aprobaran las reformas. “Está en juego la campaña electoral”, argumentó.

Una semana después, el martes 28 de marzo, hubo un intento para dar salida de manera apresurada a la “Ley Televisa” en la sesión plenaria del Senado. La táctica fue denunciada por Javier Corral y Manuel Bartlett. Sin embargo, unas

horas después, las dos comisiones dictaminadoras se reunieron y aprobaron por 11 votos a favor y 8 en contra de que la minuta fuera aprobada.

Ese día ya se había expresado una deserción clave en el seno de los senadores priistas encargados de dictaminar: el presidente de la comisión de Estudios Legislativos, el colimense Héctor Michel, quien cambió del “no” por un “sí” a favor de la iniciativa. Los presentes cuentan que al momento de votar en comisiones, Gamboa Patrón fue a buscar a Michel al baño para que no se hiciera “ojo de hormiga” y estampara su voto a favor del dictamen fuertemente criticado.

El miércoles 29 de marzo, en vísperas de la sesión definitiva del Senado se produjeron dos reuniones claves. A las 13 horas, en la casa de Eduardo Medina Mora, se volvieron a reunir Bernardo Gómez y Manuel Espino. Ahí reafirmaron el acuerdo para que la “Ley Televisa” contara con el apoyo de la mayoría de los senadores de Acción Nacional. Espino argumentó que podía lograrlo, ya que las “listas” de las candidaturas plurinominales representaban una manera de presionar a quienes querían “continuar con su futuro político”.

Paralelamente, la fracción panista tuvo una larga discusión de casi 5 horas en las oficinas de la Torre Mayor del Senado en avenida Reforma. Fue el último intento de presión. Desde Los Pinos y desde otras instancias gubernamentales se presionó a los senadores para “amarrar” la cuota de 30 votos favorables del PAN. Sumados a los 50 que ya estaban “amarrados” en el PRI y en el Partido Verde, previamente negociados con Roberto Madrazo y con Enrique Jackson; se lograba una cómoda mayoría.

“Fue una discusión catártica”, la describió uno de los senadores panistas que asistieron a la reunión en la Torre Mayor. Las posiciones y los intereses se aclararon en ese momento. A favor de la “Ley Televisa” “sin cambiarle una sola coma” estuvieron María Luisa Calderón Hinojosa, hermana del candidato presidencial; Gerardo Buganza, ex candidato a gobernador por Veracruz; Gustavo Cárdenas Gutiérrez, quien fue “premiado” después en una posición plurinominal para la Cámara de Diputados; Francisco Fernández de Cevallos y su hermano Diego Fernández de Cevallos; Fauzi Hamdam, socio del *Jefe* Diego; Gildardo Gómez Verónica; Benjamín Gallegos Soto; Addy Joaquín Coldwell; Lydia Madero; Carlos Madrazo Limón; Rafael Gilberto Morgan; Héctor Osuna, “premiado” después al ser electo como comisionado presidente de la Cofetel; Carlos Villalobos; Marco Reynoso; Jorge Zermeño Infante, futuro

presidente de la Cámara de Diputados que en ese momento se garantizó su acceso a San Lázaro después de los comicios del 2 de julio; Susana Stephenson; Jorge Lozano Armengo; Héctor Hernández; Víctor Manuel Torres; y Juan José Rodríguez Prats, quien expuso la tesis del “mal menor y el bien superior” para defender su voto a favor de la “Ley Televisa” si éste ayudaba a la campaña de Calderón. Varios senadores del PAN cambiaron el sentido de su voto. Los casos más significativos fueron el del coordinador Héctor Larios, quien durante algunas semanas apoyó a los senadores opositores. Larios posteriormente se convirtió en coordinador de los diputados del blanquiazul. Otros que dijeron que irían en contra y acabaron por acatar las presiones fueron Jorge Nordhausen y Jeffrey Jones; Federico Ling Altamirano, Jesús Galván y Carlos Medina Plascencia.

Finalmente, de 30 senadores panistas que originalmente estuvieron en contra de la “Ley Televisa”, 13 mantuvieron su posición. Destacadamente, los senadores Javier Corral, el opositor más firme, Wadi Amar Shabshab, Rómulo Campuzano, José Alberto Castañeda, Francisco Fraile, Guillermo Herbert Pérez, César Jáuregui, Filomena Margaiz, Alberto Martínez Mireles, Joaquín Montaña, Alfredo Reyes Velásquez, Luis Alberto Rico Samaniego y Felipe de Jesús Vicencio Alvarez.

Casi todos ellos fueron “castigados” posteriormente al dejarlos fuera de las listas plurinominales a la Cámara de Diputados o al perder el apoyo de la dirigencia nacional como aspirantes a alguna gubernatura.

La “lista negra” también operó en el caso del PRI. De sus más de 20 senadores que originalmente se manifestaron en contra de la “Ley Televisa”, sólo 11 mantuvieron su posición: Manuel Bartlett, Dulce María Sauri, Laura Alicia Garza Galindo, Genaro Borrego, David Jiménez, Noemí Guzmán, Lucero Saldaña, Carlos Rojas, Joaquín Cisneros, Raymundo Gómez Flores y Germán Sierra Sánchez.

De los 45 priístas que votaron a favor del dictamen, alrededor de 30 eran aspirantes a las diputaciones plurinominales o para legislaturas locales, como fue el caso de Silvia Hernández. La ex secretaria de Turismo llegó a confiarle a sus correligionarios que estaba en contra de la ley, pero que era mejor aprobarla y que “otra legislatura se encargara de modificarla”. Pragmatismo puro y duro, en el cual cayeron no pocos senadores de ambas fracciones mayoritarias.

## Debate con el silencio y presiones reveladas

“El silencio también es una posición en el debate. Los silencios se usan cuando se quiere salir rápidamente de algo porque molesta, incomoda, porque hay inseguridad o porque no hay argumentos”, afirmó Dulce María Sauri, ex dirigente nacional del PRI, para caracterizar la reticencia de los promotores de la “Ley Televisa” a sostener un debate durante la sesión del 30 y 31 de marzo.

La senadora también hizo un símil, “en algún momento me sentí identificada con la época de la mayoría aplastante priísta, cuando hablaban los compañeros del PAN y del PRD y los oíamos y luego votábamos. Y también me acordé de esta frase: como me ves, te vi; como te ves, me verás”.

Su correligionario, Manuel Bartlett durante varias ocasiones conminó a sus homólogos del Senado “se van a arrepentir, no voten por la ley”, “no les van a cumplir las televisoras”. Mordaz, Bartlett les recordó en tribuna el pasaje del “gallo degollado”, publicado en *Proceso*:

¿Es posible pensar que esta minuta no es un instrumento de Televisa? Por favor, después de haber oído lo que nos espetaron López Dóriga y Alatorre [...] nos estábamos muriendo de miedo, no fuera que nos fueran a degollar como al famoso gallo, ¿se recuerdan del gallo degollado? Bueno, no lo ignoramos señores.

Bartlett hizo referencia así a una anécdota surgida en la encerrona en el restaurante Rodavento, en Valle de Bravo, a principios de febrero de 2006. A ese encuentro promovido por Televisa asistieron los tres principales candidatos presidenciales –Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador– para discutir con la cúpula de Televisa y otros “invitados especiales”, como el ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), William Tennesse, sus proyectos de gobierno. El vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, fungió como maestro de ceremonias y “entrevistador” estrella de los candidatos. A todos les preguntó qué podía esperar Televisa frente a la ley que estaba por aprobarse en el Senado. El último día de la encerrona, se improvisó un palenque después de la actuación de la cantante colombiana Shakira. Ante sus invitados, Gómez tomó a uno de los gallos. Le cortó la cabeza y advirtió “esto le sucederá a quienes se oponen a Televisa”.

Bartlett recordó que organismos del Estado mexicano expresaron su oposición a la “Ley Televisa”: la Comisión Federal de Competencia envió 12 cuartillas al Senado “y nos pidió que no aprobemos esta minuta porque genera e impulsa la concentración, que va en contra del artículo 28 constitucional”. También el IFE expresó su oposición porque la minuta permite que compren propaganda electoral no sólo los partidos sino también los candidatos.

En clara relación a la manera en que Televisa “degolla” a quienes ya no le son funcionales a sus intereses, Bartlett relató el caso del ex precandidato presidencial priísta Arturo Montiel. El ex gobernador mexiquense gastó más de mil millones en publicidad televisiva. A pesar de este derroche, “lo hicieron pedazos, inmisericorde, nadie les puede reclamar, son impunes, acabaron con la honra, bien o mal, eso sí, con documentos salidos del gobierno”.

“Saben ustedes —exclamó Bartlett—, se los digo también por experiencia, no respetan a quien no se hace respetar, a quien no es respetable, al que se agacha, al que se atemoriza, al que tiene miedo de que destruyan su carrera política; yo diría que quien vote, con todo respeto, está destruyendo su carrera política el día de hoy”.

En su última intervención, al filo de las 3 de la madrugada, Manuel Bartlett les advirtió a sus correligionarios, “la opinión pública está francamente en contra. Aquí se oyó, se sabe que hubo un vergonzoso sometimiento del Congreso. Lo sabe la opinión pública y no lo va a olvidar”.

Bartlett parafraseó también a la articulista Denisse Dresser para advertirle a los priístas que esta ley no ayudará a Madrazo, “Ella tituló su artículo (en *Proceso*): Así no, Felipe. Yo le añado: Así no, Roberto”.

Sólo la bancada de los senadores del PRD votó unánimemente en contra de la ley y por modificaciones a la minuta, pero dejaron mal parados a sus correligionarios de la Cámara de Diputados que se sumaron a la “unanimidad” del 1 de diciembre de 2005 y que tres semanas después se arrepintieron “por ignorancia”, según confesó Pablo Gómez, coordinador de esa bancada en San Lázaro.

El senador Raymundo Cárdenas también advirtió, “el *Televisagate* nos va a salir mucho más caro que el Pemexgate”. Y César Raúl Ojeda, quien subió a tribuna con un polígrafo para detectar a los senadores mentirosos que dicen no haber sido presionados, sentenció que con esta ley “prácticamente postularíamos que para

los políticos es mejor atender el llamado de los medios electrónicos que forjar nuestra credibilidad con el contacto con los electores”.

Ojeda Zubieta también se refirió a otra anécdota que ilustraba las presiones que ejerció Televisa:

Ocurrió en Mérida, Yucatán, tierra de Eric Rubio y de Emilio Gamboa —relató el perredista—, en la que algunos agremiados de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión fueron conminados después de una presentación por parte del señor Javier Tejado Dondé (director jurídico de Televisa y cercano a Bernardo Gómez), a cerrar los espacios a quienes representaran una clara postura contraria a sus intereses y me identificó con uno de ellos en una reunión interna de la CIRT en julio (2005); otra más se celebró 3 meses después en la Ciudad de México y me repitió la receta.

El señor Tejado Dondé, como todo mundo lo sabe, realizó un intenso cabildeo y celebró numerosas reuniones con los grupos parlamentarios y con senadores en particular [...] Llegó al punto de ofrecer, por ejemplo, influir en el contenido de la difusión de las campañas, o hacer presente o ausentar a personas y candidatos. Es obvia la implicación. Algunos cedieron y seguramente hoy se verá reflejado; otros más no cedieron ni cederán y quedará esto manifiesto ante la ciudadanía.

Jesús Ortega, senador y entonces coordinador de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, calificó la jornada como “Una traición al país. Es verdaderamente trágico. No exagero”.

### **Panismo fracturado**

El senador Javier Corral presentó una y otra vez argumentos técnicos y jurídicos para modificar la minuta. Nadie subió a rebatirle. Su correligionario Felipe Vicencio, al inicio de la sesión, pidió una moción suspensiva y documentó cómo la minuta que se aprobó en la Cámara de Diputados fue distinta a la que llegó al Senado. Cambiaron en el trayecto dos artículos, el cuarto transitorio de la Ley de Telecomunicaciones y el 17-E de la Ley de Radio y Televisión, pero Héctor Osuna, promotor de la minuta, así como el presidente del Senado, Enrique

Jackson, decidieron que no se trataba de dictámenes distintos y presentaron una “fe de erratas” enviada desde la Cámara de Diputados.

Corral y Vicencio debatieron una y otra vez, orientando sus argumentos a la ideología y espíritu del panismo. Su coordinador, Héctor Larios, leal a la línea de su dirigente nacional Manuel Espino, los conminó varias veces a no pelear con sus correligionarios, en especial con el *Jefe* Diego y con Fauzi Hamdam, el dúo promotor de las leyes corporativas.

Durante su intervención a favor de la minuta, Larios no aceptó cuestionamientos ni de Javier Corral ni de César Raúl Ojeda. La argumentación del coordinador de los senadores del PAN se basó en negar que la “Ley Televisa” provoque una mayor concentración monopólica.

“Quienes votaremos a favor creemos que vale la pena avanzar en la mejora de la ley”, afirmó Larios, pero siempre insistió que era “urgente” aprobarla “en sus términos”, sin incorporarle ningún cambio.

En su turno, Felipe de Jesús Vicencio denunció que su correligionario Diego Fernández de Cevallos, “furibundo partidario de la minuta”, conminó a los senadores panistas con el siguiente argumento para que apoyaran la minuta, “aprobemos las minutas paralelas, así podremos decir que exigimos garantías a los de abajo, como las procuramos para los de arriba”.

Al responder por alusiones personales, Fernández de Cevallos retó a los opositores de la “Ley Televisa” que se apruebe “de inmediato” una iniciativa complementaria para “mejorarla”. El *Jefe* Diego aprovechó su participación en tribuna para atacar a Corral y a Vicencio, así como a Bartlett y a Ojeda:

Creo que este debate lo menos que nos puede enseñar es que no vale decir que este Senado está dividido entre valientes y cobardes; entre patriotas y filibusteros, entre hombres que se sienten albaceas de Gómez Morín, porque si algo hizo Gómez Morín con su palabra y con su vida fue respetar la opinión de los demás.

En la madrugada, Fernández de Cevallos, siempre proclive a gestos escenográficos, portando su saco roto por los “ultras” que lo increparon al entrar al recinto, sentenció sin mucho ánimo que “hubo un debate franco”, que “no nos estamos conformando con una minuta aprobada el día de hoy”, pero defendió una y otra vez que no se le hiciera una sola modificación a la “Ley Televisa”.

Por eso el más contento era el ex secretario de Comunicaciones y Transportes de Carlos Salinas de Gortari. El senador yucateco Emilio Gamboa Patrón volvía a ser el hombre del picaporte entre los dueños de los medios y los políticos. Si en 1994, poco antes de que culminara el sexenio, le otorgó 62 concesiones más a Televisa y repartió 180 frecuencias “combo” a los principales grupos radiofónicos, esa noche logró que se aprobara una ley que le permite a las empresas televisivas y telefónicas prácticamente quedarse con el espectro radioeléctrico sin obligación de pagar una contraprestación.

Gamboa Patrón participó poco en tribuna, pero desde su curul movable —no dejaba de “cabildear” con todos los senadores—, le enviaba señales a Enrique Jackson para sugerir cuándo podían o no hablar para “alusiones personales”. Fue el director técnico de la sesión.

Ni siquiera se inmutó cuando en el ocaso de la sesión, el constitucionalista del PRI, David Jiménez, opositor de la “Ley Televisa” sentenció que se violaba la Constitución y acabó citando al ex primer ministro inglés Winston Churchill, “cuando todos se muestran de acuerdo, es que alguien no está pensando”.

### **El negocio de la “Ley Televisa”**

Poco antes de las 2 de la madrugada, después de que la mayoría mecánica del Senado rechazara una por una todas las propuestas de modificación durante la discusión en lo particular, el senador Javier Corral subió a tribuna para rebatir el texto del artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión. “Tarde, pero hemos llegado a la nuez de esta ley”, subrayó.

Todos los senadores escuchaban una de las argumentaciones centrales de los opositores a la minuta: a través de la reforma a este ordenamiento el Estado mexicano no ordena la recuperación del espectro radioeléctrico liberado con la transición del modelo analógico al digital.

“El artículo 28 plantea un régimen privilegiado y especial para la radio y la televisión en materia de telecomunicaciones, sin la obligación de pagarle al Estado por el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Hemos insistido una y otra vez, en que los legisladores no pueden permitir la discrecionalidad planteada para los grandes monopolios de la autoridad en la exigencia de esa contraprestación y nunca se nos ha querido hacer caso”, reprochó Corral.

“Aquí se ha dicho que ya está en el transitorio sexto de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Qué aberración hacer permanente un transitorio de la ley”, insistió el senador panista.

Corral negó que ese artículo transitorio, aprobado en 1995, señalara que el Estado *deberá* recuperar el espectro porque, entre otras cosas, no existía tal mercado en ese entonces. Fue hasta 1998 cuando el Estado mexicano licitó por primera vez nueve zonas del sistema de telefonía celular conocida como PCS (*Personal Communications System*) para 720 megahertz. El Estado obtuvo por esa licitación 1 mil millones de dólares. Tan sólo en el Distrito Federal, 1 megahertz vale 5 millones de dólares y actualmente el espectro de mayor calidad es el de la banda UHF que abarca de los canales 14 hasta el 56.

En Estados Unidos, continuó Corral,

[...] la digitalización planteó y fue una discusión del Congreso, fueron largas sesiones en el Senado para definir mecanismos de recuperación del espectro analógico. Ellos recuperaron mediante mecanismos de política digital el espectro, incluso los canales espejos no se los dieron en UHF se los dieron en VHF y dejaron limpia esa banda de UHF [...] Por concepto de recuperación de espectro, los Estados Unidos ingresaron 28 mil millones de dólares y de esos 28 mil millones de dólares crearon un fondo de 1 500 millones de dólares para financiar el tránsito digital. No sé en estricto sentido cuánto sea el megahertz allá o acá, lo que sí digo es que esta minuta no prevé la recuperación del espectro analógico.

Corral abundó que el espectro de mayor calidad es el que se localiza en la banda UHF, la que inicia en el canal 14 y llega hasta el 56. “Ese es un espectro de mucha calidad, por supuesto que tiene un valor muy importante”.

Durante su larga y documentada intervención, el senador panista hizo una revelación que la mayoría de los asistentes desconocían: la iniciativa original del diputado Miguel Lucero Palma, el promotor de la “Ley Televisa”, sí incluía la obligación de “rescatar” el espectro en la redacción del artículo 28. Originalmente se estipuló:

La Secretaría podrá cambiar o rescatar una frecuencia o una banda de frecuencias concesionadas o permisionadas en los siguientes casos:

- I. Cuando lo exija el interés público;
- II. Por razones de seguridad nacional;

- III. Para la introducción de nuevas tecnologías;
- IV. Para solucionar problemas de interferencia perjudicial.

Corral argumentó que por la manera que se redactó después el artículo 28, el Estado ya no podrá recuperar el espectro sobrante y la nueva ley anulará el anterior acuerdo de telecomunicaciones y los títulos de concesión que sí obligan hasta ahora a devolver el espectro.

Ninguno de los senadores promotores de la ley le rebatió a Corral esta argumentación. La respuesta fue el silencio y 78 votos que desecharon la propuesta de modificación que propuso el legislador de Acción Nacional.

Después de argumentar las modificaciones necesarias sobre el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, Javier Corral argumentó a favor de modificaciones necesarias en los artículos 28-A, 28-B y 28-C.

En el primer caso, el 28-A, Corral argumentó que se requerían incorporar cuatro criterios sobre uso eficiente del espectro; promoción de la competencia, diversidad, calidad y mejores precios; impulso de la penetración y cobertura de servicios; y proteger los servicios de radiodifusión digital para evitar que “algún concesionario de radio sea sólo operador de telecomunicaciones” porque le resulte más rentable.

En el caso del artículo 28-C, Corral propuso un mecanismo de recuperación del espectro de aquellas frecuencias asignadas en materia de transición digital.

“Las frecuencias asignadas a los concesionarios y permisionarios de servicios de radiodifusión que se liberen después de la migración a tecnología digital, deberán reintegrarse al Estado y su utilización se encontrará sujeta a los procedimientos establecidos por la legislación para fomentar la ampliación de la oferta de servicios por parte de otros operadores”, argumentó Corral.

Todas estas propuestas fueron desechadas por la mayoría mecánica.

Acto seguido, Felipe de Jesús Vicencio subió a tribuna para argumentar modificaciones al artículo 72-A de la Ley Federal de Radio y Televisión que les permite a los concesionarios incrementar su porcentaje de tiempo de publicidad hasta en un 5% si cubren la cuota de 20% de promoción a la producción independiente.

Vicencio advirtió que el problema de este ordenamiento es que no prohíbe que empresas filiales, subsidiarias de las dos grandes televisoras se conviertan en “productores independientes” y obstaculice el acceso a aquellas compañías

videoproductoras que no tienen ningún vínculo con Televisa o TV Azteca. Propuso que se realizaran precisiones para definir lo que debe considerarse como producción nacional independiente.

Los senadores Raymundo Cárdenas y Héctor Michel Camarena argumentaron en contra de la disposición del artículo 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisión que abre la posibilidad de que sean los candidatos y no sólo los partidos políticos quienes contraten publicidad en medios electrónicos. Este ordenamiento contraviene al propio Cofipe, específicamente el artículo 48, donde se establece que sólo los partidos pueden contratar tiempo-aire en la pantalla comercial. Ambas propuestas fueron desechadas.

Casi al final del largo debate con “el silencio”, Dulce María Sauri subió para proponer una adición a un transitorio de la Ley Federal de Radio y Televisión para permitir que los 83 radiodifusores pequeños que tienen 199 estaciones en el país, que conforman la radio independiente y que transmiten sólo en AM, tengan acceso a una Frecuencia Modulada —o FM— y que tampoco queden al margen de la reconversión tecnológica.

Los senadores Manuel Bartlett, César Raúl Ojeda y Javier Corral subieron a la tribuna para reforzar la propuesta de Dulce María Sauri. Corral puntualizó que el 76% de las frecuencias de radio se encuentran en manos de 13 grupos y que el 82% de las de televisión está concentrado en sólo dos televisoras. Para desconcentrar el sector, es necesario apoyar a la radiodifusión independiente.

Tampoco esta propuesta fue aceptada.

### **Un órgano regulador débil**

Otro de los temas más polémicos de la iniciativa es la configuración de un nuevo órgano regulador débil, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), “chimuela”, como la calificó el senador José Alberto Castañeda Pérez, otro de los legisladores opositores que participó intensamente en el debate.

La senadora Dulce María Sauri subió cuatro veces a la tribuna durante la discusión en lo particular para argumentar que los próximos comisionados de la Cofetel serán “estatuas de sal” frente a los grandes monopolios de telecomunicaciones y televisión (Telmex y Televisa) a los que denominó como “King Kong y Godzilla”.

Leyó todos los verbos “débiles” contenidos en el artículo 9-A que estipulan las facultades del órgano regulador, “expedir, realizar estudios, opinar, someter a la aprobación de la SCT, coordinar, establecer, administrar, llevar el registro, promover y vigilar”. Esta debilidad, subrayó, “permitirá la ley del más fuerte” en telecomunicaciones y de radio y televisión.

Sauri también propuso que los comisionados en lugar de durar ocho años con posibilidad de llegar hasta 16 años, desde este sexenio, en su encargo, se les redujera a 5 con prórroga hasta 10 años. Y también advirtió que el segundo artículo transitorio, le otorgaba al presidente Vicente Fox la facultad discrecional de nombrar a los comisionados y de expedir la ley, según la conveniencia de los tiempos político-electorales.

En entrevista, Sauri Riancho abundó sobre esta hipótesis:

El argumento de que votar a favor es garantizar la campaña del candidato del PRI a la Presidencia de la República es muy débil. Por el contrario, ojalá que el presidente de la República publique esto a la brevedad, porque de otra manera le acabamos de entregar una pistola martillada para ponerla en la sien de Roberto Madrazo y de los concesionarios. Él les va a decir pago por ver, después del 2 de julio, si gana mi candidato les publico la ley y nombro a los comisionados.

Las propuestas de modificación de Sauri Riancho fueron apoyadas y complementadas en tribuna por Manuel Bartlett, Javier Corral y Alfredo Reyes. Ninguna prosperó.

En contrapunto, Emilio Gamboa insistió que no se trata de un órgano regulador débil. Por el contrario, “se elimina la actual discrecionalidad” existente en la designación de los comisionados de la Cofetel. Y acusó al actual subsecretario de la SCT, Jorge Álvarez Hoth, de haber hecho “cambios discrecionales” en la integración de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

No transcurrió ni medio año para que los supuestos argumentados por Dulce María Sauri en relación con la Cofetel se confirmaran. Durante la Comisión Permanente, en mayo de 2006, el gobierno de Vicente Fox envió su terna de propuesta de comisionados. Tres de las propuestas fueron rechazadas por la mayoría de los senadores del PRI y del PAN: Rafael del Villar, Gonzalo Martínez Pous y Julio Di Bella, este último, director de Canal Once y que estaba propuesto como futuro presidente de la Cofetel. Nunca se argumentó

suficientemente el rechazo a estas tres propuestas. Los dos primeros, Del Villar y Martínez Pous se inconformaron con la decisión del Senado y promovieron un amparo, cuya resolución hasta ahora se mantiene pendiente. Di Bella no continuó con el litigio.

En lugar de estos tres comisionados rechazados, los partidos y las dos grandes televisoras incorporaron a comisionados “por cuota” para garantizar el control de Cofetel. Para sorpresa de todos, el ex senador Héctor Osuna cambió su estafeta legislativa para recibir el premio como comisionado presidente de la Cofetel. La propuesta de Osuna fue pactada en Los Pinos y en Televisa. El PRI propuso a otro senador cercano al grupo de Enrique Jackson y a TV Azteca, para que quedara como comisionado de la Cofetel. La última propuesta fue el investigador Eduardo Ruiz Vega.

El comportamiento de esta Cofetel, a un año de haberse aprobado la “Ley Televisa”, ha confirmado las hipótesis de un organismo “secuestrado” por los intereses de las dos grandes televisoras, de Telmex y de otras compañías telefónicas de la competencia que se pelean por tener el control del organismo que debe ser el principal responsable de regular el espectro y definir nuevas concesiones.

El rechazo tajante de este organismo a la posibilidad de que exista una “tercera cadena” televisiva nacional, a pesar de la opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia, confirmó que la Cofetel opera como un organismo condicionado por los intereses de Televisa y TV Azteca. Ambas televisoras emprendieron una agresiva campaña en la pantalla para evitar que la sociedad entre Telemundo y el Grupo Xtra, de la familia Saba, se consolidara como el más probable concesionario de una “tercera cadena”.

Por si fuera poco, la Cofetel “reformada” ha mantenido un soterrado pleito con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), encabezada por Luis Téllez, por el control del sector de telecomunicaciones y de radio y televisión.

## **Rebelión de los medios públicos**

La “Ley Televisa” ahondó la vulnerabilidad de los medios públicos, en especial, la radio y televisión universitaria, las estaciones que dependen de los fondos

gubernamentales federales y estatales y el amplio espectro de las compañías de radio indígenas.

Un día antes de que se realizara la sesión de aprobación de la “Ley Televisa” y después de la polémica sesión de comisiones, el martes 28 de marzo, que dictaminó sin discusión la minuta, el Instituto Mexicano de la Radio (Imer) encabezó una insólita protesta en sus 17 estaciones de radio en AM y FM para demostrar la indefensión de los medios públicos y la clausura de la pluralidad y la diversidad en el cuadrante radiofónico. Durante 24 horas continuas, las estaciones del Imer transmitieron sólo una canción e intercalaron mensajes en los cuales advirtieron:

Un país sin pluralidad de medios de comunicación sería como escuchar la misma canción todo el día. Hoy, miércoles 29 de marzo, sólo transmitimos una canción. Las modificaciones a la Ley de Radio y Televisión reducen la posibilidad de crear opciones. El Instituto Mexicano de la Radio manifiesta su desacuerdo. Tú ¿qué piensas?

Este mensaje junto con otros dos fue transmitido de manera continua en las frecuencias 660 y 1350 de AM, así como 94.5, 105.7, la estación Reactor dedicada al público juvenil y 107.9 de FM, o en la popular 1220, intercalada con la canción “Cheque en Blanco”, interpretada por Chelo Silva, o en la 710 donde se escuchaba “La Neta de las Netas” de los Tigres del Norte.

La rebelión del Imer fue acompañada con la modificación de la programación de Radio Educación, que durante 24 horas transmitió mesas redondas críticas contra la “Ley Televisa”, por Radio UNAM, que durante el día repitió el programa “Plaza Pública”, conducido por Miguel Ángel Granados Chapa, y por la transmisión de mensajes críticos a la ley y una cobertura combativa por parte de Canal Once, la señal más antigua y con mayor audiencia de la televisión pública.

“Fue una reacción de indignación ante la aprobación en comisiones, sin debate, de la ley. Me indignó que los derechos de los ciudadanos fueran vulnerados y no lo podemos permitir”, subrayó a *Proceso* la directora del Imer, Dolores Béistegui, quien ese mismo día envió al Senado más de 2 mil correos electrónicos de los radioescuchas protestando por la amenaza que representa la “Ley Televisa” para los medios públicos.

La rebelión llamada “Operación resistencia” se preparó a las 12 de la noche del mismo martes. Béistegui se reunió con varios de sus productores y creativos. A las 2 de la mañana escribieron el texto de los mensajes que se transmitieron y cada uno de los directivos de las estaciones eligió la “canción ancla”.

“Ningún proyecto de ley anterior es tan abiertamente a favor de los intereses privados como éste. El círculo rojo se ha solidarizado con el Imer y esto nos ha ganado la credibilidad de los radioescuchas. Ojalá que otros medios públicos lo repliquen y venzamos el miedo”, indicó Béistegui.

— ¿No le teme a las consecuencias? —se le cuestionó.

— Por supuesto que hay consecuencias de tus actos. Algunos me acusaron de no ser “institucional”. Para mí, ser institucional es cumplir con el mandato que me dieron de defender el espacio público.

Esta rebelión impactó en el debate del Senado. Javier Corral hizo un reconocimiento explícito a la “valentía” de Canal Once, Imer, Radio Educación por haber protestado. Manuel Bartlett, al discutirse las modificaciones al artículo 20 de la minuta para incorporar, acusó a los promotores de tener “fobia a los medios públicos”. Y recordó la anécdota de cuando él encabezaba la Secretaría de Gobernación y se creó Imevisión y el Instituto Mexicano de la Radio.

Por supuesto que “El Tigre” (Emilio Azcárraga) amenazó y se quejó. Pero como entonces había un poquito de autoridad, “El Tigre” se calló.

Las modificaciones que solicitaron no se aprobaron en el debate. Quedaron marginadas las radios comunitarias, las permisionarias y sólo se les ofreció la promesa de incorporarlas a través del artículo quinto transitorio de los “acuerdos paralelos” a la “Ley Televisa”. Según ese transitorio, el poder Ejecutivo cuenta con 180 días, “previa consulta pública”, para expedir un reglamento de medios públicos y en el mismo plazo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitirá los lineamientos para promover el desarrollo de las estaciones permisionadas, ya sean culturales o educativas.

“Es una engañifa eso de los acuerdos paralelos”, coincidieron varios de los críticos a la ley.

A final de cuentas, quienes votaron a favor de la “Ley Televisa”, recordó en tribuna Felipe Vicencio, ignoraron el 74% de las propuestas de 46 especialistas consultados que pidieron cambios y ajustes a la minuta, incluyendo los solicitados por la comisionada Xóchitl Gálvez, a favor de la radiodifusión indígena, y por Ernesto Velásquez, director de TV UNAM, para que se incluyeran a los 49 sistemas de televisión y radio públicas del país.